

EN LA
COMISIÓN DE LO JURÍDICO
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

18 de octubre de 2022

Ponencia
A FAVOR del PC 1403,
EN CONTRA, salvo enmiendas, del PC 715 y
EN CONTRA de los PC 1410, PC 1084 y PS 693

Presentada, a nombre del
Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL por sus siglas
en inglés), por:

Lcdo. Kenneth Romero Cruz
Director Ejecutivo

Lcdo. Guillermo L. Mena Irizarry
Director de Legislación,
Política Pública y Propugnación

Estimado Señor Presidente, Honorable Orlando J. Aponte Rosario, y honorables miembros de la Comisión:

I. **Trasfondo de Política Pública**

Los legisladores estatales hispanos a través de los Estados Unidos, incluyendo legisladores de Puerto Rico, aprueban resoluciones al reunirse en nuestro Caucus que expresan su sentir considerado y estudiado con miras al bienestar de sus comunidades.

En lo que concierne a los proyectos de epígrafe, los legisladores aprobaron, por un lado, en la Cumbre Anual del 8 de diciembre de 2018 en San Diego, California, bajo la presidencia del Senador Carmelo Ríos, la Resolución Número 2018-27, titulada en inglés, ***Improved Universal Sex Education Including Consent***,¹ y por el otro lado, aprobaron unánimemente por voz de legisladores de todas las regiones reunidos en Comité Ejecutivo el

¹ Disponible en <https://nhcsl.org/resources/resolutions/2018/2018-27/index.html>

12 de agosto de 2022 en Brooklyn, New York, bajo la presidencia de la Senadora Nellie Pou, puertorriqueña radicada en New Jersey, la Resolución Número 2022-01, titulada en inglés, ***Defending the Right to Abortion and Equal Access to Reproductive Healthcare*** (anejada).

Explican que las personas con recursos económicos más limitados tienden a buscar y necesitar abortos con más frecuencia porque tienen menos acceso a contraceptivos y a educación sexual comprensiva. De hecho, según al menos un estudio, las mujeres que viven bajo el nivel de pobreza tienen 5 veces más embarazos indeseados que las que tienen ingresos mayores al doble del nivel de pobreza.²

El año pasado en los Estados Unidos, el 95% de los embarazos indeseados se debieron a la falta de uso o al uso inconsistente de contraceptivos.³ Y aunque Puerto Rico educa más que muchos, los datos más recientes de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una cuarta parte (24.7%) de las escuelas superiores de Puerto Rico admiten que no les enseñaron a los estudiantes como obtener condones y el 7% admiten que no les enseñaron cómo obtener acceso a información válida y confiable, a productos y a servicios relacionados a HIV, a enfermedades de transmisión sexual y a embarazos.⁴

Por todo ello, nuestro Caucus se opone a cualquier legislación o reglamentación que tienda a desventajar, mediate su texto, intención o efecto, a cualquier paciente perteneciente a minorías raciales o étnicas, o de escasos recursos, en su derecho al acceso al cuidado comprensivo de salud reproductiva, incluyendo el aborto.

En resumen y en lo relativo a los proyectos que nos atañen, las resoluciones buscan garantizar:

- a) el derecho a educación en sexualidad, integral e inclusiva;
- b) el derecho esencial de salud sexual y reproductiva a tomar decisiones sobre el embarazo propio;
- c) la protección y expansión del acceso al cuidado de salud reproductiva, incluyendo el aborto;

² Finer LB and Zolna MR, *Declines in unintended pregnancy in the United States, 2008–2011*, New England Journal of Medicine, 2016, 374(9):843–852. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa1506575>

³ United Health Foundation, *America's Health Rankings: Unintended Pregnancy*. Disponible en https://www.americashealthrankings.org/explore/health-of-women-and-children/measure/unintended_pregnancy

⁴ Centers for Disease Control and Prevention. *School Health Profiles 2020: Characteristics of Health Programs Among Secondary Schools*, p 87, Tabla 13a (Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2022). Disponible en <https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/profiles/results.htm>

- d) la protección de la confidencialidad y confianza dentro de la relación médico-paciente;
- e) la consistencia en el derecho sobre salud que confía en las mejores-prácticas médicas (al igual que se hace en los casos de impericia por ejemplo); y,
- f) la confianza en que los proveedores médicos y sus pacientes tomarán la decisión correcta en cada circunstancia individual; y,
- g) la cobertura comprensiva de los servicios reproductivos, incluyendo el aborto por los planes de Medicaid (el plan de salud del gobierno) y los planes médicos privados.

II. P. de la C. 1403 – A favor

En vista de lo anterior, **apoyamos el P. de la C. 1403**, presentado por la representante Mariana Nogales Molinelli, y los representantes José B. Márquez Reyes y Denis Márquez Lebrón, porque explícitamente busca adelantar materialmente los mismos fines y medios de política pública que esas resoluciones, y, en términos de los planes de salud, logra indirectamente el propósito al enmendar todo reglamento para garantizar el derecho a decidir sobre el embarazo.

III. P. de la C. 1084 – En contra

La Resolución 2022-01 de los legisladores estatales hispanos también se opone a cualquier predeterminación legislativa que restrinja el derecho a escoger, incluyendo las que intentan predeterminar la viabilidad fetal utilizando el tiempo gestacional, por un lado, o cualquier resultado aislado de exámenes políticamente determinados, como, por ejemplo, la detección del latido fetal.

Por lo tanto, **nos oponemos al P. de la C. 1084** porque, además de violar el principio de confianza y confidencialidad en la relación médico-paciente, busca utilizar arbitrariamente el resultado aislado de un examen de latido fetal como base para prohibir un aborto posterior, a pesar de que, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos aclaró que el llamado latido fetal no es ningún latido, sino en realidad una especie de parpadeo de unos tejidos que pudieran convertirse en un corazón y que se logran induciéndolos eléctricamente mucho antes de que el tejido pueda funcionar como corazón.⁵

⁵ American College of Obstetricians and Gynecologists, *Statement for the Record Before the House Committee on Oversight and Reform Regarding the Hearing “A State of Crisis: Examining the Urgent Need to Protect and Expand Abortion Rights and Access,”* p. 6 (Sept. 30, 2021).

IV. P. del S. 693 – En contra

Según explicamos anteriormente, la Resolución 2022-01 de los legisladores estatales hispanos se opone a cualquier predeterminación legislativa que restrinja el derecho a escoger, incluyendo las que intentan predeterminar la viabilidad fetal utilizando el tiempo gestacional.

Nos oponemos al P. del S. 693 porque utiliza ese tipo de predeterminación legislativa sobre la realidad individual médica (en este caso 22 semanas para presumir la viabilidad) en vez de descansar en el principio de confianza en que los proveedores médicos y sus pacientes tomarán la decisión correcta en cada circunstancia individual. Además, viola el principio de consistencia en el derecho sobre las mejores-prácticas médicas al definir legislativamente las emergencias limitadas que permitirían el aborto del feto inviable, en vez de confiar en el discernimiento profesional del médico basado en los desarrollos de la medicina y en los equipos disponibles. Hace lo mismo al utilizar términos ambiguos como ‘habitualmente’ que chocan con la realidad de que pueden existir situaciones imprevistas mientras la habitualidad necesariamente se refiere al pasado. También al limitar la determinación de incompatibilidad con la vida al periodo neonatal que solo dura poco menos de un mes.

Además, fomenta la fuga de médicos al requerir que los proveedores mensualmente sometan al Departamento de Salud de Puerto Rico información detallada relacionada con toda terminación de embarazo llevada a cabo desde las veintidós (22) semanas. Pocos médicos estarán dispuestos a deslindar textos legales en vez de enfocarse en la salud cada vez que vean a una paciente. De hecho, varios estados, incluyendo New York,⁶ han decidido proteger a médicos y proveedores de salud de acciones en contra de su licenciamiento por practicar o recomendar abortos a residentes de jurisdicciones en que están prohibidos.

V. P. de la C. 1410 – En contra

El P. de la C. 1410 busca ordenar un referéndum de consulta de enmienda constitucional con dos potenciales enmiendas contradictorias. La Propuesta 1, de resultar vencedora, ordenaría prohibir de plano el aborto salvo limitadísimas excepciones. Sin entrar en la cuestionable constitucionalidad de aprobar legislativamente un proyecto con enmiendas

Disponible en <https://www.acog.org/-/media/project/acog/acogorg/files/advocacy/acog-sfr-cor-hearing-on-abortion-rights-and-access.pdf?la=en&hash=3D4B2670F359F4A0405D222ACE019BC3>
⁶ S09079B <https://nyassembly.gov/leg/?bn=S09079&term=2021>

contradictorias, la Propuesta 1 violaría todos los principios antes expresados. Por ello, nos **oponemos P. de la C. 1410**.

VI. P. de la C. 715 – En contra salvo enmiendas

Sobre el **P. de la C. 715**, es de especial relevancia para nosotros que, en términos de intención legislativa, la propia exposición de motivos explica que la enmienda “no afecta la posibilidad de la mujer a poder a abortar ya que la femenina que es asesinada o que al ser agredida tiene como consecuencia la muerte del *nasciturus*, tiene el deseo de tener a su bebé.” Sin embargo, cierta ambigüedad en su redacción nos lleva a **oponernos si no se enmienda**. A saber, para evitar interpretaciones que contravengan los principios expresados anteriormente y el fin expresado y antes citado, recomendamos:

1. En la Sección 3, que busca añadir los incisos (f) y (g) al Artículo 93 de la Ley 146-2012, según enmendada:
 - i. eliminar el propuesto inciso (g) que habla de la muerte del *nasciturus* provocada por agresión contra la mujer o con la intención provocar la muerte del *nasciturus*, ya que ese delito está contemplado actualmente en dos delitos distintos descritos en los Artículos 98 y 100 de esa ley.
 - ii. eliminar todo el texto nuevo propuesto que le sigue al propuesto inciso (g) porque no tiene sentido en casos de asesinato de la persona embarazada.
 - iii. Finalmente, reescribir el propuesto inciso (f) para que rece:

(f) Toda muerte de un nasciturus resultante del asesinato en primer o segundo grado de la persona embarazada. En los casos en que la presencia del nasciturus no sea evidente, se presumirá rebatiblemente desde el momento de cualquier prueba positiva de embarazo de la víctima gestante hasta que haya transcurrido el tiempo que razonablemente puede durar un embarazo, salvo que medie una prueba negativa de embarazo, un aborto por intervención médica o de salud, el parto, un ciclo menstrual, o un aborto espontáneo o natural que no haya sido provocado por la persona imputada con violar este inciso. Para propósitos de los elementos subjetivos descritos en el Artículo 22, se presumirá rebatiblemente que la persona imputada de violar este inciso conocía la circunstancia de la presencia del nasciturus si el embarazo era visible exteriormente, si la víctima gestante había anunciado en redes sociales o comunicado de alguna otra forma el hecho del embarazo, o si la persona imputada mantenía o había mantenido relaciones familiares, conyugales, de

convivencia, de intimidación o noviazgo con la víctima gestante que a su vez conocía de su propio embarazo.

2. En la Sección 1, que añade el inciso (ccc) al Artículo 14 de la Ley 146-2012, según enmendada, reescribir la definición para que lea:

(ccc) nasciturus, para propósitos exclusivamente del inciso (f) del Artículo 93: significa el embrión o feto humano en cualquier etapa de desarrollo.

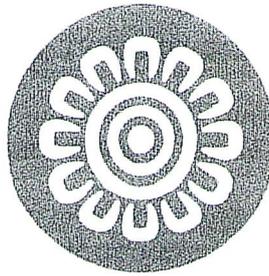
3. Añadir una sección que enmiende el Artículo 92 de la Ley 146-2012, según enmendada, para añadir una cláusula de salvedad a la definición de asesinato para que rece:

Salvo la excepción dispuesta en el inciso (f) del Artículo 93, asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente.

4. Eliminar la actual Sección 2 que busca añadir un Artículo 24 (a), respectivo al *Error en los fines*, a la Ley 146-2012, según enmendada. Esa adición no es necesaria para lograr el propósito del P. de la C. 715 y, por su amplitud, y su redundancia en cierta medida y contradicción en cierta medida con los Artículos 21 al 24 del Código, pudiera tener consecuencias imprevistas e indeseadas a través de todos los delitos del Código. Atendemos lo que entendemos eran los fines de esta sección mediante la presunción que recomendamos crear con respecto a los elementos subjetivos del Artículo 22 en la definición ampliada del nuevo delito.

Si se hicieran dichas enmiendas, retiraríamos la oposición al P. de la C. 715. No nos oponeríamos a cualquier otra que sea compatible con ellas y que esté acorde con los principios y fines discutidos en esta ponencia y sus anejos.

Agradecemos a la Comisión la oportunidad de expresarnos en torno a todos estos proyectos. Estamos a sus ordenes para cualquier pregunta.



NHCSL

THE NATIONAL HISPANIC CAUCUS OF STATE LEGISLATORS

EMERGENCY RESOLUTION No. 2022-01

Defending the Right to Abortion and Equal Access to Reproductive Healthcare

Reported to the Caucus by the NHCSL Human and Civil Rights Task Force
Rep. Jessica González (TX), Chair

Further reported to the Caucus by the NHCSL Healthcare Task Force
Rep. Alma Hernández (AZ), Chair

Sponsored by
Asw. Jessica González-Rojas (NY) and Sen. Daniel A. Ivey-Soto (NM)

Unanimously approved by the NHCSL Executive Committee on behalf of the entire
Caucus on August 12, 2022

WHEREAS, freedom of reproductive choice is an area of medicine that is centered in mental and physical health, along with long-term, child welfare issues;¹ and,

WHEREAS, in **Resolution 2018-27, Improved Universal Sex Education Including Consent**,² we stressed that improved sexual health outcomes lead to “healthy and fulfilling lives and relationships;” and,

¹ When Women are Denied an Abortion, their children fare worse than their peers. (Stat News, Dec. 5, 2018). <https://www.statnews.com/2018/12/05/how-abortion-denial-affects-children-well-being/>

² <https://nhcsl.org/resources/resolutions/2018/2018-27/>

WHEREAS, comprehensive abortion care is included in the list of essential health care services published by World Health Organization in 2020;³ and,

WHEREAS, while the issue of “abortion” has been politicized, as a medical practice it is normally a simple health care intervention that can be effectively managed by a wide range of health workers using medication or a medical procedure; and,

WHEREAS, abortions are most often performed during the first 28 weeks of pregnancy, depending on clinical indications, and, within the first 12 weeks of pregnancy, a medication abortion can also be safely self-managed by the pregnant patient outside of a health care facility (e.g., at home), in whole or in part;⁴ and,

WHEREAS, nearly 1 in 4 women will seek an abortion before they reach the age of 45,⁵ with the largest number between the ages of 20-24;⁶ and,

WHEREAS, federal statutory language known as the Hyde Amendment, authorized and reauthorized since 1976, prohibits the use of federal funds to pay for abortions, except in case of rape or incest or if the pregnancy would place a woman in danger of death. As a result, only 16 states—namely Alaska, California, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont, and Washington—currently provide coverage for abortion for low-income women through Medicaid, using state funds to do so;⁷ and,

WHEREAS, of the 10 states with the highest percentage of Hispanic population, five do not provide the full range of reproductive health coverage (including abortions) through Medicaid: Texas, Arizona, Nevada, Florida and Colorado;⁸ and,

³ World Health Organization. (2021, November 25). Abortion. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>

⁴ World Health Organization. (2021, November 25). Abortion. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>

⁵ “Abortion Is a Common Experience for U.S. Women, despite Dramatic Declines in Rates.” *Guttmacher Institute*, 22 Nov. 2017, <https://www.guttmacher.org/news-release/2017/abortion-common-experience-us-women-despite-dramatic-declines-rates>.

⁶ Abortion Is a Common Experience for U.S. Women, Despite Dramatic Declines in Rates. (2017, October 19). Guttmacher Institute. <https://www.guttmacher.org/news-release/2017/abortion-common-experience-us-women-despite-dramatic-declines-rates>. And see Kaiser Family Foundation, Reported Legal Abortions by Race of Women Who Obtained Abortion by the State of Occurrence. (2021, December 1) (noting that a woman’s reproductive years can range between 12 to 51 years of age),

⁷ Data as of May 2022. See “State Funding of Abortions under Medicaid.” *KFF*, 7 July 2022, <https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/abortion-under-medicicaid/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22%3A%22Location%22%2C%22sort%22%3A%22asc%22%7D>.

⁸ *Ibid.*

WHEREAS, through its impact on Medicaid, the Hyde Amendment disproportionately and negatively affects low-income people, which has a disproportionate impact on Hispanics and other people of color⁹ and because low-income women are also more likely than more affluent women to have an unintended pregnancy due to the full range of health education and healthcare options available to affluent women;¹⁰ and,

WHEREAS, in a recent study determined that the financial situation of an individual seeking an abortion, if not given the option to receive an abortion, will be drastically impacted once the child is born. There is around an 80% increase in unpaid bills, along with more individuals having to file for bankruptcy and being evicted from their properties, all of which perpetuates that cycle of poverty;¹¹ and,

WHEREAS, there is a disturbing correlation that states that have stricter abortion laws, also tend to have fewer safety net benefits to support children from low income homes and their families;¹² and,

WHEREAS, persons with lower incomes and people of color are also more likely to seek abortions because they have less access to contraceptives or sex education. In 2021, 95% of unintended pregnancies were from lack of or inconsistent use of contraceptives.¹³ As noted in our previously cited 2018 resolution on sex education,

⁹ The average income made by Hispanic women in 2019 was \$36,110. In comparison, white women in the same year made an average of \$48,620. See National Women’s Law Center. (2017, August). STATE LAWS REGULATING INSURANCE COVERAGE OF ABORTION HAVE SERIOUS CONSEQUENCES FOR WOMEN’S EQUALITY, HEALTH, AND ECONOMIC STABILITY. NWLC. <https://nwlc.org/wp-content/uploads/2017/08/50-State-Insurance-Coverage-of-Abortion-1.pdf>. And see U.S. Bureau of Labor Statistics. (2019, April 22). Median Weekly Earnings Were \$806 for Women, \$1,004 for Men, in First Quarter 2019. U.S. Bureau of Labor Statistics. <https://www.bls.gov/opub/ted/2019/median-weekly-earnings-were-806-for-women-1004-for-men-in-first-quarter-2019.htm>.

¹⁰ See Finer LB and Zolna MR, Declines in unintended pregnancy in the United States, 2008–2011, *New England Journal of Medicine*, 2016, 374(9):843–852. (In 2011, the unintended pregnancy rate among women with an income below the federal poverty level, \$18,530 for a family of three in 2011, was more than five times the rate among women with an income at or above 200% of the poverty level.)

¹¹ Sarah True, Women Denied Abortion See Significant Financial Distress, Study Says (US News, Dec. 15 2021) Available at <https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-12-15/study-women-denied-an-abortion-see-surge-in-financial-distress> (citing Sarah Miller, Laura R. Wherry, Diana Greene Foster, The Economic Consequences of Being Denied an Abortion (Am. Econ. J.: Econ. Policy, Forthcoming). Available at <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20210159&from=f>)

¹² Npr. “The Indicator from Planet Money: The Economic Effects of Being Denied an Abortion on Apple Podcasts.” *Apple Podcasts*, 6 July 2022, <https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-indicator-from-planet-money/id1320118593?i=1000569068792>.

¹³ Health of Women and Children Report. (2021). America’s Health Rankings. Explore unintended pregnancy in U.S: https://www.americashealthrankings.org/explore/health-of-women-and-children/measure/unintended_pregnancy/state/U.S?edition-year=2021

fewer than half of high schools and only a fifth of middle schools teach all 16 topics recommended by the CDC as essential components of sex education;¹⁴ and,

WHEREAS, lack of access for affordable health care disproportionately affects mostly minority women, like Hispanics, due to barriers related to the social determinants of health, as we discussed in **Resolution 2020-06, Equity Plan for Affordable Healthcare**¹⁵ among others, combined with the instability around how much financial support will be given, even if the patient has insurance.¹⁶ The average cost of an abortion currently varies between \$750 in the first trimester, and up to \$1,500 later in pregnancy for women with no health insurance.¹⁷ Since federal funding cannot be used to cover an abortion, unless the state covers the cost, getting an abortion can present an insurmountable financial burden; and,

WHEREAS, according to the latest data, New Mexico and Arizona are the states with the highest percentage of Hispanic women seeking out and receiving abortions.¹⁸ In New Mexico, approximately 56% of abortions performed were on Hispanic women. Although New Mexico is one of the sixteen states that funds and covers abortion through Medicaid, many Hispanics do not qualify for Medicaid and do not have insurance,¹⁹ making abortions otherwise financially unattainable; and,

WHEREAS, in the states of Idaho, Utah, North Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Missouri, Indiana, and Kentucky it is impossible for a patient to get a health insurance plan that covers abortions, even a private plan;²⁰ and,

¹⁴ **NHCSL Resolution 2018-27, Improved Universal Sex Education Including Consent**
<https://nhcsl.org/resources/resolutions/2018/2018-27/> (citing “NHPC Press Release: Schools Teaching Prevention.” (2015, December 9). Centers for Disease Control and Prevention <https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/nhpc-press-release-schools-teaching-prevention.html>)

¹⁵ <https://nhcsl.org/resources/resolutions/2020/2020-06/index.html>

¹⁶ How the U.S. Health Insurance System excludes abortion. (2021, December 3). Center for American Progress. <https://www.americanprogress.org/article/u-s-health-insurance-system-excludes-abortion/>

¹⁷ Piscareta, E. (2022, February 9). How much does an abortion cost? Planned Parenthood. <https://www.plannedparenthood.org/learn/ask-experts/how-much-does-an-abortion-cost>

¹⁸ Kaiser Family Foundation, Reported Legal Abortions by Race of Women Who Obtained Abortion by the State of Occurrence. (2021, December 1)

¹⁹ Padula, W.V. & Baker, K. (2017). Coverage for Gender-Affirming Care: Making Health Insurance Work for Transgender Americans. *LGBT Health*, 4(4), 244-247.
<https://doi.org/10.1089/lgbt.2016.0099>

²⁰ Bans on Insurance Coverage of Abortion.” (2022). American Civil Liberties Union.
<https://www.aclu.org/issues/reproductive-freedom/abortion/bans-insurance-coverage-abortion>.

WHEREAS, the health of a pregnancy, including viability, varies based on each individual patient;²¹ and,

WHEREAS, even though, as an exception, federal funds can be used to cover abortion in the case of unsafe pregnancies through Medicaid, and even with other current abortion laws allowing abortions, about 23,000 women still die each year from unsafe abortions and tens of thousands end up having health complications during or after pregnancy;²² and,

WHEREAS, the Supreme Court recognized the federal constitutional right to an abortion in 1973,²³ but then in 1992 allowed states to restrict abortion access after viability of the fetus unless it posed an undue burden on the person seeking the abortion. Many states have limited who can obtain an abortion, who performs the procedure and at what point in pregnancy it can be performed. States have also interfered with the doctor-patient relationship by imposing other medically unnecessary restrictions, such as mandatory waiting periods, biased counseling requirements, and facility restrictions;²⁴ and,

WHEREAS, despite the fact that Supreme Court repeatedly held that abortion cannot be banned before viability many states have attempted to ban abortion with various medically inaccurate justifications. For example, Texas enacted the “Heartbeat Act”, a six-week ban on abortion, justifying the ban by stating that at six weeks of pregnancy, a fetal heartbeat can be detected.²⁵ The American College of Obstetricians and Gynecologists opposed the bill as an “arbitrary” ban, and its president explained that “pregnancy and fetal development are a continuum. What is interpreted as a heartbeat in these bills is actually electrically induced flickering of a portion of the fetal tissue that will become the heart as the embryo develops;”²⁶ and,

WHEREAS, earlier this year, in an unprecedented reduction of civil rights in the case of *Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization*, 597 U.S. ___ (2022), the Supreme Court overruled its own *Roe v. Wade* (1973) and *Planned Parenthood v. Casey* (1992) precedents, in a 5-4 decision, holding that the Constitution of the United States does

²¹ Romanis, Elizabeth Chloe. (2020, October 9). Is 'Viability' Viable? Abortion, Conceptual Confusion and the Law in England and Wales and the United States” OUP Academic. Oxford University Press. <https://academic.oup.com/jlb/article/7/1/1/Isaa059/5918485>

²² The Negative Health Implications of Restricting Abortion Access. (2021, December 13). News. <https://www.hsph.harvard.edu/news/features/abortion-restrictions-health-implications/>.

²³ *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973).

²⁴ *Planned Parenthood v. Casey*, 505 U.S. 833 (1992).

²⁵ Texas Heartbeat Act. (2021, September 1).

<https://capitol.texas.gov/tlodocs/87R/billtext/pdf/SB00008H.pdf>

²⁶ Glenza, J. (2019, June 5). Doctors’ organization: calling abortion bans “fetal heartbeat bills” is misleading. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2019/jun/05/abortion-doctors-fetal-heartbeat-bills-language-misleading>.

not confer a right to abortion, and upheld, in a 6-3 decision, a Mississippi law that bans abortions after 15 weeks, with very few medical exceptions.

THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL) supports the vast majority of medical organizations and the World Health Organization in finding that the right to choose is an essential part of sexual and reproductive health and calls on states and the federal government to guarantee its full protection and comprehensive, affordable access; and,

BE IT FURTHER RESOLVED, that the National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL) calls on lawmakers and policymakers to prioritize and support any legislation or regulations protecting and expanding access to all reproductive health care, including abortion; protecting confidentiality and trust within the doctor-patient relationship; advocating for reliance on medical best practices within healthcare law; and trusting medical providers and their patients to make the right decision in each individual circumstance; and,

BE IT FURTHER RESOLVED, that the National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL) opposes any legislative predeterminations that restrict the right to choose, including but not limited to, those that attempt to predetermine fetal viability using gestational age or politically-determined isolated test results like fetal heartbeat detection; and,

BE IT FURTHER RESOLVED, that the National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL) opposes any legislation or regulation, be it federal or state, that disadvantages, through its text, intent or effect, racial or ethnic or low income minority patients in their right to equal access to comprehensive reproductive health, including abortion; and,

BE IT FINALLY RESOLVED, that the National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL) specifically calls on Congress to repeal the Hyde Amendment and on all states to cover comprehensive reproductive health services, including abortion, through Medicaid programs, and on all states to require private insurance coverage of abortion services as a medical procedure.

AT THE REQUEST OF THE HUMAN AND CIVIL RIGHTS TASK FORCE AND THE HEALTHCARE TASK FORCE, AND IN ACCORDANCE WITH THE IMMEDIATE NEEDS PROCESSES OUTLINED IN THE BYLAWS, THE EXECUTIVE COMMITTEE UNANIMOUSLY APPROVED THIS RESOLUTION ON AUGUST 12, 2022, AT ITS MEETING IN BROOKLYN, NEW YORK.